



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 27/11/2019

Radicado	08-001-33-33-014-2019-00124-00
Medio de control o Acción	Ejecutivo
Demandante	IPS Clínica San Rafael Ltda.
Demandado	Unidad de Salud Universidad del Atlántico
Juez	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor Juez, paso a su despacho el expediente de la referencia, informándole que se encuentra vencida la fijación en lista del recurso de reposición en subsidio el de apelación interpuesto por la parte ejecutante, sin que la contraparte hiciera uso del mismo.

PASA AL DESPACHO
Para resolver recurso

CONSTANCIA
Recurso de Reposición y en subsidio el de apelación (folio 808-810)

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Radicado	08-001-33-33-014-2019-00124-00
Medio de control o Acción	Ejecutivo
Demandante	IPS Clínica San Rafael Ltda.
Demandado	Unidad de Salud Universidad del Atlántico
Juez	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

Visto el informe secretarial que precede, y una vez vencido el término de fijación en lista del recurso de reposición y en subsidio el de apelación presentado por la demandante IPS Clínica San Rafael Ltda., a través de apoderado, sin encontrarse oposición por parte de la demandada, pasa el Despacho a resolver lo pertinente.

La parte demandante a través de apoderado, interpone y sustenta recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el numeral segundo del auto proferido por este juzgado el 18 de septiembre de 2019,¹ -por medio del cual se resolvió recurso de reposición y se decidió no reponer el auto de fecha 10 de julio de 2019 que avocó conocimiento y se citó a las partes del proceso a la audiencia de que trata el artículo 372 del C.G.P y ordenó suspender el proceso de la referencia, en consideración a que la Universidad del Atlántico se encuentra dentro del proceso de reestructuración de pasivos con fundamento en la ley 550 de 1999-, providencia que fue notificada por Estado No. 123 del 19 de septiembre de 2019. La entidad ejecutante radicó la referida impugnación el día 24 de septiembre de 2019², concluyendo el Despacho que la misma se presentó oportunamente.

El apoderado de la parte ejecutante sustenta su recurso en los siguientes criterios que a continuación se citan textualmente:

“1. Se fundamenta el señor juez para decretar la suspensión del proceso en dos hechos: i) Encontrarse la Universidad del Atlántico, en acuerdo de reestructuración (ley 550 de 2019- ley 1116 de 2002) desde el mes de agosto de 2006 y ii) ser las obligaciones que se persiguen anteriores al Acuerdo de Reestructuración.

2. Al respecto he de manifestar que las obligaciones que se persiguen la presente demanda tienen su génesis en los servicios médicos hospitalarios, prestados por la Clínica San Rafael a los trabajadores o empleados de dicho ente mater afiliados a la Unidad de Salud de la Universidad de Atlántico.

3. Los recursos de que se nutre la unidad de salud, provienen de la cotización a la Seguridad Social realizado por los afiliados.

4. Todas las obligaciones, fueron adquiridas por la demandada, en los años 2016 y 2017, es decir, con posterioridad a la iniciación del acuerdo de reestructuración.

Si bien es cierto que la Universidad del Atlántico se encuentra en Acuerdo De Reestructuración de Pasivos desde el mes de agosto de 2006, también lo es, que las obligaciones inventariadas por la Universidad eran las existentes al corte de los Estados financieros del año 2005, tanto que las diferentes convocatorias que se hicieron en el curso del trámite del acuerdo, fue realizado a los referidos acreedores. Luego las obligaciones contraídas por la demandada, con mi

¹ Ver fls. 787-804.

² Ver fls. 808 a 810.

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

representada por la prestación de los servicios médicos-hospitalarios, fueron adquiridos con mucha posterioridad al referido acuerdo de reestructuración de pasivos, por lo cual, primero están excluidas de dicho acuerdo y segundo pueden ser cobradas ejecutivamente,

FUNDAMENTO DE DERECHO

Como fundamento de derecho me permito transcribir el concepto de fecha 13 de noviembre de 2018 de la Superintendencia de sociedades y las normas en el enunciadas que guardan relación con el caso que nos ocupa.

“OFICIO 220-180047 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 REF: COMPETENCIAS JURISDICCIONALES LEY 550 DE 1999.

Aviso recibo de su comunicación radicada bajo el número citado, mediante la cual solicita el concepto de esta Entidad en torno a la procedencia de acciones jurisdiccionales derivadas de relaciones jurídicas surgidas al interior de un proceso de Acuerdo de Reestructuración, regido por la Ley 550 de 1999.

La consulta se formula en los siguientes términos:

¿Es posible demandar ante la justicia ordinaria el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza fosa acuerdo previamente incumplidas con fundamento en el artículo 34 numeral 9 de la ley 550 de 1999 dentro de un proceso de reestructuración de pasivos de un ente territorial?

(...)

De manera previa es oportuno señalar en primer lugar, que en atención al derecho de petición en la modalidad de consulta la Superintendencia con fundamento en los artículos 14 y 28 de la ley 1755 de 2015 que sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso administrativo emite un concepto de carácter general sobre las materias administrativas a su cargo más no en relación con una sociedad o situación en particular ni sobre los asuntos que esté llamada a conocer en sede jurisdiccional razón por la cual sus respuestas en esta instancia no son vinculantes, ni compromete la responsabilidad de la entidad.

(...)

En tratándose del proceso concursal de acuerdo de reestructuración regido por la ley 550 de 1999 debe precisarse que en las diferentes etapas del mismo existe una regulación diferente respecto de la presentación de acciones ejecutivas en contra de las empresas en reestructuración : a a partir del inicio De la negociación es decir a partir de la admisión al proceso de reestructuración y hasta la firma del acuerdo coma no pueden iniciarse procesos ejecutivos contra el empresario y se suspenden los que están en curso cómo lo dispone el artículo 14 de la ley de reactivación económica artículo 14 efectos de la Iniciación de la negociación a partir de la fecha de iniciación de la negociación y hasta que hayan transcurrido los 4 meses previstos en el artículo 27 de esta ley no podrá iniciarse en ningún proceso de ejecución contra el empresario y se suspenderán los que se encuentren en curso quedando legalmente facultados el promotor y el empresario para alegar individual o conjuntamente la nulidad del proceso o pedir su suspensión al juez competente para lo cual bastará que aporten copia del certificado de la Cámara de Comercio en el que conste la inscripción del aviso en los anteriores términos se adiciona el artículo 170 3/7 del Código de Procedimiento Civil; y el juez que puede informado por el demandado de la iniciación de la negociación y actúe en contravención a lo dispuesto en el presente inciso, incurrirá en causal de mala conducta. Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no ópera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario”.

(...)

*c. Una vez firmado el acuerdo, termina la protección que el proceso brindo frente a los procesos ejecutivos, **de modo que las obligaciones que adquiera la entidad reestructurada con posterioridad al inicio de la negociación y que fueron incumplidas pueden ser perseguidas coactivamente ante el juez competente. 2. esta medida aplica***

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

indistintamente para empresarios privados como para entes territoriales en proceso de reestructuración".

(...)

Bajo otro tópico, repito las obligaciones, materia de esta demanda tiene su origen en los servicios médicos- hospitalarios prestados por mi mandante a los afiliados de la demandada, en consecuencia los recursos o dineros que recibe la universidad del atlántico (SIC), por las cotizaciones realizadas por su personal docente, empleados y trabajadores, sólo pueden ser destinados al pago de las obligaciones propias de la seguridad social, los cuales deben ser girados a la UNIDAD DE SALUD DE ESA UNIVERSIDAD para el cubrimiento de las obligaciones nacidas de la prestación de los servicios de salud y por lo tanto no pueden hacer parte del acuerdo de reestructuración.

Por las razones prácticas ilegales expuestas, con el debido acatamiento le pido a su señoría se sirva revocar el numeral segundo del proveído de fecha septiembre 18 de 2019, o en su defecto se conceda el recurso de apelación que en forma subsidiaria Interpongo".

Entrando el despacho a resolver sobre el recurso de reposición, se debe señalar en primera instancia, que a pesar que el recurrente presenta recurso de reposición en contra de un auto que resolvió otro recurso de reposición, prima facie, no procedería el recurso interpuesto, sin embargo, en el presente caso, comoquiera que la inconformidad versa sobre una nueva decisión que no había sido objeto de impugnación previa, la cual quedó declarada en el numeral segundo de la parte resolutive del auto impugnado de fecha 18 de septiembre de 2019, y que fue suspender el proceso de la referencia, en el sub examine procede el recurso de reposición interpuesto. Por lo cual se pasa a resolver el mismo en los siguientes términos.

Tal y como se señaló en el auto recurrido, la Universidad del Atlántico, persona jurídica que tiene a su cargo y responsabilidad la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico, se encuentra en ejecución del proceso de reestructuración de pasivos cobijado bajo la ley 550 de 1999, la cual legalmente pudo iniciar en tanto el artículo 1° de la mencionada Ley en el inciso adicionado por el artículo 2 de la ley 922 de 2004, le posibilita su inclusión a las Universidades Estatales al señalar:

Artículo 1° "Inciso adicionado por el artículo 2 de la Ley 922 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> <El artículo 125 de la Ley 1116 de 2006 cambió la entidad promotora, subrayada, de los acuerdos de reestructuración que suscriban las universidades públicas, ver Notas de Vigencia> **Esta ley se aplicará igualmente a las universidades estatales del orden nacional o territorial**, las cuales podrán celebrar por intermedio del rector, previa autorización del Consejo Superior Universitario en ejercicio de la autonomía universitaria, el acuerdo de reestructuración **en los términos del Título V** de la presente ley. El promotor de los acuerdos de reestructuración que se suscriban con las Universidades Públicas será el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Así mismo se trae a colación el artículo 58 de la ley 550 de 1999 que prevé:

"Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, de conformidad con las siguientes reglas especiales:

1 (...)

13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, **y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho**”

De lo anterior se infiere claramente que no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución, ni embargos de los activos y recursos de la entidad y que de hallarse en curso tales procesos o embargos se suspenderán de pleno derecho, en el presente caso, se encontraba en curso un proceso ejecutivo que en la Jurisdicción Ordinaria, se le había dado trámite, sin considerar lo que el Despacho tuvo en cuenta para tomar la decisión de suspender el proceso, esto es, que la Universidad del Atlántico tuviese en ejecución el acuerdo de reestructuración de pasivos, tal y como la norma lo señala expresamente, no hay lugar a dar una interpretación diferente, en tanto, no existe norma especial que señale lo que el recurrente alega en su escrito, cuando en síntesis señala que: *las obligaciones adquiridas con posterioridad al acuerdo de reestructuración de pasivos pueden ser cobradas ejecutivamente.*

Este argumento mencionado por el ejecutante no encuentra asidero, muy a pesar que utiliza como sustento un concepto jurídico de la Superintendencia de Sociedades, el cual hace referencia al proceso de negociación de entidades diferentes a las consignadas en el artículo 58 que hace alusión a las entidades territoriales y que por lo señalado en el artículo 1° de la ley 550 de 1999, inciso adicionado por la ley 922 de 2004, le es aplicable a las universidades estatales, Nacionales o Territoriales en los términos del Título V, esto es “DE LA REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, que inicia con lo señalado en el mencionado artículo 58.

Así las cosas, esta Agencia Judicial se atiene a lo dispuesto en el auto de fecha 18 de septiembre de 2019, comoquiera que los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión no se han modificado, en ese sentido, se decidirá no reponer el auto de fecha 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se ordenó suspender el proceso ejecutivo de la referencia.

En lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por el ejecutante en subsidio del de reposición, contra el auto que ordenó suspender el proceso ejecutivo, el Despacho rechazará el mismo por improcedente, habida cuenta que tal decisión no se encuentra enlistada en el artículo 321³ del Código General del Proceso, norma aplicable al presente

³ Artículo 321 CGP. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.
2. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros.
3. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.
5. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva.
6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva.
7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.
9. El que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano.
10. Los demás expresamente señalados en este código.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

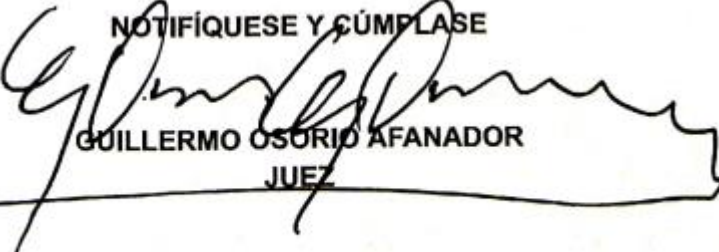
trámite según la remisión que autoriza el artículo 306 del CPACA, de lo que se infiere que no tiene la naturaleza de apelable.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla,

RESUELVE:

1°.- NO REPONER el auto de fecha 18 de septiembre de 2019 de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2°.- RECHÁZASE el recurso de apelación que en subsidio del de reposición, interpuso la parte demandante, IPS Clínica San Rafael Ltda., de conformidad con lo señalado en precedencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO

N° 134 DE HOY 30/11/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA